

Seguridad en el Maule: una urgencia que no admite esperas

La Región del Maule, históricamente reconocida por su tranquilidad y vocación productiva, enfrenta hoy un escenario de seguridad pública que desafía la resiliencia de sus habitantes. Los recientes hechos de violencia reportados en nuestras páginas —desde asaltos perpetrados por bandas armadas en zonas rurales como Teno, hasta el hallazgo de sofisticados cultivos de droga y la circulación de sustancias sintéticas en la costa curicana— no son episodios aislados, sino síntomas de una metamorfosis delictual que exige una respuesta estatal sin titubeos.

Las cifras del balance 2025 y lo que va de 2026 revelan una paradoja preocupante: mientras las autoridades destacan una estabilización estadística en ciertos indicadores nacionales, la percepción de inseguridad en el Maule se mantiene en niveles críticos, superando el 87%. Esto no es fruto del azar. El crimen organizado ha dejado de ser una amenaza lejana de la capital para instalarse en nuestras comunas, aprovechando la extensión del territorio y la vulnerabilidad de sectores habitacionales que hoy

se sienten desprotegidos.

La creación del Ministerio de Seguridad Pública fue recibida con esperanza, pero a casi un año de su implementación, la región demanda ver resultados tangibles. No basta con planes estivales de refuerzo u operativos focalizados; se requiere una dotación policial permanente y proporcional al crecimiento poblacional evidenciado por el último Censo. La precariedad operativa que acusan algunos sectores y la necesidad de una inteligencia criminal efectiva son deudas que la autoridad central debe saldar con urgencia.

El Maule no puede acostumbrarse a vivir bajo llave ni a normalizar el estruendo de armas de fuego en sus plazas. La seguridad es la base de cualquier desarrollo social y económico; sin ella, nuestra identidad regional se desdibuja bajo el miedo. Es imperativo que la coordinación entre el Gobierno Regional, las policías y el Ministerio Público trascienda el papel y se traduzca en una presencia disuasiva real. El tiempo de los diagnósticos ya pasó; hoy la ciudadanía exige el derecho fundamental de volver a vivir en paz.